

La Política Migratoria de Trump: Un Enfoque Controversial y sus Implicaciones socioeconómicas para Latinoamérica y EE.UU.

La decisión del Presidente de EE.UU. Donald Trump de implementar una política migratoria centrada en la deportación masiva de latinoamericanos ha generado un intenso debate en la sociedad estadounidense y en la comunidad internacional. Esta medida, presentada como una solución para fortalecer la seguridad nacional y proteger los empleos de los ciudadanos estadounidenses, ha sido recibida con críticas y preocupación por parte de defensores de los derechos humanos, líderes políticos y organizaciones internacionales. Desde su campaña presidencial, Trump prometió adoptar una postura firme frente a la inmigración irregular, argumentando que la llegada de personas sin documentos contribuía al crimen, la sobrecarga de los servicios públicos y la competencia desleal en el mercado laboral. Su política migratoria se ha centrado en la construcción de un muro en la frontera con México, la ampliación de los criterios de deportación y la eliminación de programas como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que protegía a jóvenes indocumentados traídos a Estados Unidos durante su niñez. Sin duda alguna la deportación de latinoamericanos ha tenido un impacto profundo en las comunidades migrantes. Familias han sido separadas, padres han sido expulsados dejando atrás a hijos ciudadanos estadounidenses, y muchos individuos que han construido sus vidas en Estados Unidos durante años enfrentan la incertidumbre y el miedo. Además, esta política ha generado un clima de hostilidad hacia la comunidad latina, exacerbando la discriminación y los prejuicios. Desde un punto de vista económico, se suma que los países de origen de los migrantes se ven afectados por la disminución de ingreso de divisas por las remesas de migrantes, ya que las remesas representan entre 20% y 25% del PIB de El Salvador, Guatemala, Honduras. En México suponen 60.000 millones de dólares al año. En Ecuador el tercer trimestre de 2024, el flujo de remesas ingresado fue de USD 1.748,5 millones, significando el 24,4% del PIB. Siendo que el 70,6% de flujo de remesas de este trimestre del 2024 correspondió a EE.UU.

La deportación masiva también tiene consecuencias significativas en la economía de EE.UU. ya que los migrantes latinoamericanos desempeñan un papel crucial en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios, contribuyendo al crecimiento económico del país. Su expulsión está generando escasez de mano de obra y está afectando negativamente a las industrias que dependen de su trabajo, ya que la mayoría de estadounidenses no realizan los trabajos que ejecutan los migrantes, como los agrícolas, de la construcción, manufactura, transporte, hotelería, comida, turismo, ocio y entretenimiento, entre otras más que requiere experiencia y fuerza física, como es la actividad agrícola que requiere contratar entre 2 millones de trabajadores al año.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta política viola principios fundamentales como el derecho a la vida familiar y la protección de los menores. Además,



se ha cuestionado la efectividad de las deportaciones como herramienta para reducir el crimen, ya que estudios demuestran que los migrantes no representan una amenaza mayor para la seguridad pública en comparación con los ciudadanos estadounidenses, ya que la delincuencia y alto consumo de sustancias sujetos a fiscalización especialmente opioides y el mal afamado fentanilo, son ejecutados por ciudadanos estadounidenses en un número de 48,5 millones (16,7%) según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud de Estados Unidos de 2023 (NSDUH). A nivel internacional, la medida ha tensado las relaciones entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos, siendo el caso que se pretende cumplir con deportar 11 millones de personas entre ellos: 4 millones de mexicanos, 2 millones de centroamericanos, más de 800.000 sudamericanos y 400.000 caribeños, estas acciones han provocado llamados en redes sociales a parar el trabajo latino, y a no consumir productos de empresarios antinmigrantes, como es la Coca Cola, Target, Starbucks, Costco, Amazon, Walmart, entre otras, que utilizan mano de obra de migrantes. Gobiernos de la región han expresado su preocupación por el trato dado a sus ciudadanos en el proceso de deportación, y han llamado a que se dé un comportamiento con enfoque más humano y colaborativo en la gestión migratoria.

La política migratoria de Trump refleja una visión de América primero que prioriza los intereses nacionales sobre consideraciones humanitarias y globales. Sin embargo, es importante preguntarse si esta estrategia realmente beneficia a Estados Unidos a largo plazo. La deportación masiva no solo tiene un costo humano incalculable, sino que también podría afectar la economía y la imagen del país en el escenario internacional. En lugar de enfoques punitivos, se necesitan soluciones integrales que aborden las causas raíz de la migración, como la pobreza y la violencia en los países de origen, y que promuevan la integración y el respeto de los derechos humanos. La migración es un fenómeno complejo que requiere políticas basadas en la evidencia, la compasión y la cooperación internacional, incluida la necesidad empresarial e industrial de mano de obra migrante. Solo así se podrá construir un sistema migratorio justo y sostenible para todos.

Por:

Dr. Gorki Aguirre Torres Ph.D.
Director Instituto Internacional de Ciencias Políticas
ICPI-UTEG.